

INFORME DE IMPACTO SOBRE LA COMPETENCIA DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO PARA LA AGENDA 2030 DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (en adelante, LGUM), se aplica a cualquier actuación administrativa, disposición o medio de intervención de cualquier autoridad competente que incida, directa o indirectamente en el acceso y el ejercicio de todas las actividades económicas en condiciones de mercado por parte de los operadores económicos legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.

A estos efectos, tal y como señala el artículo 14 de la LGUM, en los procedimientos de elaboración de normas que afecten de manera relevante a la unidad de mercado, la autoridad competente proponente de la norma pondrá a disposición del resto de autoridades a través del sistema de intercambio electrónico de información previsto en el artículo 23 de dicha Ley, con la antelación suficiente, el texto del proyecto de norma, acompañado de los informes o documentos que permitan su adecuada valoración, incluyendo en su caso la memoria del análisis de impacto normativo.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la LGUM, todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, simplificación de cargas y transparencia. En particular, se garantizará que cumplen sus preceptos las disposiciones de carácter general que regulen una determinada actividad económica o incidan en ella.

El proyecto de Decreto por el que se regula la organización y el funcionamiento del Consejo para la Agenda 2030 del Principado de Asturias, lo concibe como un órgano colegiado de consulta y participación, con el objetivo de prestar asesoramiento y colaboración institucional entre la Administración del Principado de Asturias y la sociedad civil para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 y no presenta impactos negativos apreciables sobre la estructura de la oferta en el mercado, ni sobre la competencia entre operadores, pues no afecta al acceso a actividades económicas en condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.

Asimismo, el texto del proyecto no incorpora ningún elemento que suponga discriminación o menoscabo de la competencia para las personas, físicas o jurídicas, que pretendan intervenir en el campo de las políticas y actividades en materia de Agenda 2030.

En lo referido al principio de simplificación de cargas, el Decreto 79/2019, de 30 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, modificado por Decreto 35/2020, de 2 de julio, atribuye a la Dirección General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030 las funciones relativas a la implementación de los medios para la consecución de los objetivos planteados por la Agenda 2030.

El proyecto no implica en ningún caso la imposición de requisitos a operadores económicos para su acceso a ningún tipo de actividad en el Principado de Asturias. Tampoco incurre en ninguna de las actuaciones que limitan las libertades de establecimiento y circulación que señala la LGUM en el artículo 18.

En Oviedo, en la fecha de la firma digital
EL DIRECTOR GENERAL DE GOBERNANZA PÚBLICA,
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y AGENDA 2030

JOSE ANTONIO
GARMON
FIDALGO -

Firmado
digitalmente por
JOSE ANTONIO
GARMON FIDALGO -

Fecha: 2021.05.17
15:49:29 +02'00'